



SENTENCIA

PROCESO	Ordinario laboral
DEMANDANTE	José Domingo Saldarriaga Jiménez y María Vilma Arias de Saldarriaga
DEMANDADO	Protección S.A.
RADICADO	05-001-31-05-004-2019-00742
TEMA	Pensión de Sobreviviente
DECISIÓN	Confirma sentencia

El quince (15) de marzo de dos mil veintitrés (2023), el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL**, integrada por los magistrados **HUGO ALEXÁNDER BEDOYA DÍAZ, CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA** y **GUILLERMO CARDONA MARTÍNEZ**, quien actúa como ponente, previa deliberación del asunto, según consta en el **ACTA 048** de discusión de proyectos, procede a dictar sentencia de segunda instancia dentro del proceso ordinario promovido por **JOSÉ DOMINGO SALDARRIAGA JIMÉNEZ** y **MARÍA VILMA ARIAS DE SALDARRIAGA** contra la sociedad **ADMINISTRADORA DE PENSIONES Y CESANTÍA PROTECCIÓN S.A**, con radicado **05-001-31-05-004-2019-00742**.

• **PRETENSIONES:**

Los demandantes pretenden que se declare que son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes con ocasión al fallecimiento de su hija **LINA MARÍA SALDARRIAGA ARIAS**.

Como consecuencia, que se condene a **PROTECCIÓN S.A.** a reconocer y pagar la pensión de sobrevivientes por el fallecimiento de su hija, desde la fecha del fallecimiento, junto con los intereses de mora o en subsidio indexación y las costas procesales.

• **HECHOS:**

Frente a los hechos manifestaron que la causante LINA MARÍA SALDARRIAGA ARIAS se afilió a PROTECCIÓN S.A. desde el 1° de mayo del 2000, realizando aportes hasta el momento de su fallecimiento, el 5 de agosto de 2009. Que con ocasión al fallecimiento de su hija, se presentaron ante PROTECCIÓN S.A., solicitando el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, la cual a través de comunicado del 13 de septiembre de 2010, fue negada por la entidad, al considerar que para el momento del fallecimiento de la afiliada no dependían económicamente de la fallecida, desconociendo así que era la causante quien solventaba la mayor parte de los gastos que se generaban en el hogar, tales como alimentación, el pago de servicios públicos y demás cosas necesarias para el sostenimiento del hogar, al ser quien más ingresos ostentaba. Que se resalta que la vivienda donde residían era de la causante, quien para la fecha del fallecimiento se encontraba pagándola. Que la causante era quien solventaba los gastos personales de ellos, tales como alimentación, vestuario, diversión, medicamentos y demás cosas necesarias para su cuidado personal. Que los ingresos que percibía MARÍA VILMA ARIAS no resultan suficiente para sufragar la totalidad de los gastos y necesidades propias, al igual que las que surgen a diario en el hogar, por lo que no desvirtúa su dependencia económica respecto de la fallecida. Que JOSÉ DOMINGO SALDARRIAGA, para la fecha del fallecimiento, no contaba con un empleo estable, pues laboraba como conductor dos o tres veces a la semana en el vehículo tipo taxi de propiedad de JORGE SALDARRIAGA (fallecido). Y que la causante no estaba casada, tampoco tenía compañero permanente y no procreo hijos.

- **CONTESTACIÓN:**

✓ PROTECCIÓN S.A.:

Frente a los hechos manifestó que no es cierto que la fallecida se haya vinculado por primera vez al RAIS, toda vez que, se afilió a PROTECCIÓN S.A. el día 27 de marzo de 2000, como traslado de régimen proveniente del ISS hoy COLPENSIONES, y la fecha de efectividad de su afiliación fue el 1° de mayo de 2000, pero que es cierto que realizó aportes hasta la fecha de su muerte. Que es cierta la fecha del fallecimiento. Que es cierto que los demandantes se presentaron ante PROTECCIÓN S.A. a reclamar la prestación económica por sobrevivientes ante el fallecimiento de su hija, pero

sin estar acreditado el requisito de la dependencia económica. Que es cierto que, a través de comunicado del 13 de septiembre de 2010, PROTECCIÓN S.A. negó el reconocimiento pensional, al considerar que para el momento del fallecimiento de la afiliada los padres no dependían económicamente de la fallecida. Que no es cierto que, el fondo de pensiones desconoció que la causante era quien solventaba la mayor parte de los gastos, teniendo en cuenta que, en los formatos de la investigación realizada manifestaron que los demandantes percibían ingresos suficientes para garantizar su manutención. Que no le consta que, para la fecha de fallecimiento, la causante se encontraba pagando la propiedad donde residía junto a sus padres. Que no es cierto que la causante era quien ayudaba a solventar gastos personales, pues quedó demostrado que los demandantes tenían como subsistir con sus ingresos personales. Que no es cierto que los ingresos que percibía la señora MARÍA VILMA ARIAS no resultan suficientes, pues quedó demostrado que percibía ingresos mensuales por aproximadamente \$1'760.912, los cuales son suficientes para solventar los gastos del hogar. Que no le consta en que laboraba el demandante. Y que no es cierto que, son beneficiarios de la causante, pues no se ha acreditado la calidad de beneficiarios, además, de que el estado civil de la fallecida debe ser probado en el proceso. Se opuso a todas y cada una de las pretensiones; y formuló varias excepciones de mérito.

- **SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA:**

El 23 de agosto del 2022, el Juzgado Cuarto laboral del Circuito de Medellín, **DECLARÓ** que los demandantes no acreditaron dependencia económica para ser beneficiarios de la pensión de sobrevivencia ante el fallecimiento de su hija LINA MARÍA SALDARRIAGA ARIAS, ocurrido el día 5 de agosto de 2009.

Como argumento de su decisión, expuso que con la prueba testimonial no se acreditó la dependencia económica que tenían los demandantes frente a la causante, ya que la prueba no fue clara, contundente ni mucho menos concluyente, y además no fue desvirtuada la información escrita por éstos en la investigación administrativa, concluyéndose que no se probó que, sin el aporte entregado por la causante, peligrara la subsistencia mínima de los demandantes.

Como consecuencia, **ABSOLVIÓ** de las pretensiones declarativas, de condena y los intereses moratorios a PROTECCIÓN S.A.

Y, **CONDENÓ** en costas a la parte actora.

- **APELACIÓN:**

- ✓ **DEMANDANTES:**

Presentaron el recurso de apelación solicitando que, se revoque la sentencia íntegramente de primera instancia, argumentando que la finalidad de la pensión de sobreviviente es suplir la ausencia repentina del apoyo económico del pensionado o del afiliado, y, por ende, evitar que el deceso implique un cambio sustancial en las condiciones mínimas de subsistencia, y esto no descarta que los padres puedan recibir un ingreso fruto de su propio trabajo, actividad privada o pensión autónoma. Que el señor JOSÉ DOMINGO SALDARRIAGA no se encontraba pensionado, no tenía un trabajo estable, laboraba esporádicamente y el ingreso no era mucho, siendo este ingreso nulo. Que la señora MARÍA VILMA ARIAS, se pensionó para el año 2005 con una mesada pensional un poco mayor al salario mínimo, siendo esta insuficiente para su subsistencia lo que la obligó a seguir laborando, y para el 2009 se encontraba devengando una suma aproximada de \$1'035.000, teniendo un ingreso aproximado de \$1'700.000, sin embargo, no se lograba solventar los gastos completos del hogar, pues el aporte dado por la causante era de suma importancia. Que quedó probado que el hogar se conformaba por tres personas, y que era la demandante la que generaba los ingresos para el hogar. Que los demandantes convivían con uno de sus hijos, el señor JAVIER, el cual es discapacitado y no genera aportes económicos al hogar. Que la demandante era la que ingresaba parte de la alimentación al hogar, los gastos de salud de su hijo discapacitado, las múltiples deudas bancarias que tenía, y era la causante la que se encargaba de la otra parte de la alimentación y de la vivienda completa, ya que quedó probado que los padres vivían en la casa que era propiedad de la causante. Que el aporte tanto dinerario como habitacional dado por la causante, era relevante, contundente, periódico y necesario, para la congrua subsistencia en condiciones dignas del núcleo familiar, por lo que se debe analizar si los ingresos de la demandante, la hacían autosuficiente. Que pese a que los testigos no indicaron sumas exactas si pudieron establecer

los gastos del hogar y los gastos en que colaboraba la demandante y la causante. Que quedó demostrado que la contribución que daba la causante, era de \$350.000 o \$400.000, pero no tuvo en cuenta que era ella quien contribuía con la vivienda que proporcionaba en un 100%. Por lo anterior, se debe revisar la prueba documental y testimonial junto con el interrogatorio de parte, para poder establecer claramente que la ayuda dada por la causante era periódica y completa para hogar, quedando clara la dependencia económica parcial que era necesaria para la vida en condiciones dignas.

- **ALEGATOS:**

- ✓ **DEMANDANTES:**

En los alegatos de conclusión se expuso que, la Corte Constitucional en sentencia C-111 del 2000, declaró inexecutable la expresión total y absoluta, para en su lugar reconocer la pensión de sobrevivientes a aquellos padres que, aunque tuvieran ingresos, dependieran económicamente de sus hijos, pues basta la comprobación de la imposibilidad de mantener el mínimo existencial que les permita a los beneficiarios obtener los ingresos indispensables para subsistir de manera digna. Que la dependencia económica supone un criterio de necesidad, esto es, de sometimiento o sujeción al auxilio recibido por parte del causante, de manera que se convierta en imprescindible para asegurar la subsistencia de quien, como los padres, al no poder sufragar los gastos propios de la vida pueden requerir dicha ayuda en calidad de beneficiarios. Que responde a un juicio de autosuficiencia, que, en aras de proteger los derechos fundamentales a la vida, al mínimo vital y a la dignidad humana, admite varios matices, dependiendo de la situación personal en que se encuentre cada beneficiado. Que, si bien la demandante recibía un ingreso por su trabajo, el dinero que percibía no es suficiente para sufragar los gastos que se generan en su hogar y que le permiten sobrellevar una vida en condiciones dignas. Que para la época convivía con uno de sus hijos, el señor JAVIER quien es discapacitado y no cuenta ni contaba con un salario, ni pensión, por lo tanto, no aportaba al hogar. Que es claro que el aporte tanto dinerario como habitacional dado por la señora causante era relevante, contundente, periódico y completamente necesario para la congrua subsistencia en condiciones dignas, que no puede exigirse de manera estricta ventilar circunstancias propias de la vida privada del núcleo familiar, y pese a que los testigos no

indicaron cifras exactas, sí pudieron establecer que los gastos específicos estaban a cargo de la causante, siendo estas en forma cierta, periódica y significativa, lo que se acreditó con la declaración que de manera libre y voluntaria rindieron los testigos. Que con la ausencia de la ayuda económica dada por su hija se genera un impacto negativo. Por lo tanto, se debe revocar la sentencia, reconocer la prestación económica y los intereses de mora o en subsidio la indexación, por el pago del retroactivo pensional no reconocido por PROTECCIÓN S.A.

✓ PROTECCIÓN S.A.

El apoderado de la entidad expresa en sus alegatos de conclusión que se debe confirmar la sentencia de primera instancia, toda vez que la carga de la prueba se encuentra en cabeza de la parte demandante, quien debía demostrar pruebas idóneas y contundentes que dependían económicamente de la causante al momento de su fallecimiento, lo cual no ocurrió. Que, si bien es cierto que la sujeción monetaria no debe ser total y absoluta, ello no significa que cualquier aporte o ayuda puede ser considerada como determinante, por lo contrario, la contribución debe ser cierta, constante y significativa, de suerte que constituya el verdadero soporte y sustento económico del cual los padres derivan su subsistencia y que les permite vivir en condiciones dignas. Que al proceso fueron allegados diferentes elementos que permiten concluir que los demandantes contaban con ingresos suficientes para cubrir la totalidad de sus gastos. Que las declaraciones de parte brindadas por los demandantes, al momento de radicar el trámite pensión fueron admitidas en el proceso, plenamente válida, en tanto no fueron tachadas de falsas, reconocieron tener ingresos superiores y suficientes para cubrir la totalidad de sus gastos, igualmente, que la señora MARÍA VILMA ARIAS devengaba mensualmente \$1.100.000 y recibía mesada pensional desde noviembre de 2005. Que la señora MARÍA VILMA ARIAS, no estaba afiliada a salud como beneficiaria de su hija, pues ella misma realizaba sus aportes como pensionada cotizante y como trabajadora. Que al momento del fallecimiento la causante no convivía con sus padres, por el contrario, se encontraba laborando y viviendo con su hermana en la ciudad de Bogotá, y se hace extraño cómo es posible que les brindara una ayuda económica hasta el punto de hacerlos depender económica de ella, cuando vivía en otra ciudad donde debía solventar la totalidad de sus gastos y los de su hermana quien no se encontraba laborando

para el momento del deceso. Que los demandantes podían cubrir la totalidad de esos gastos con sus propios ingresos, que eran autosuficientes, tanto así, que no requerían de ayuda o suma adicional para cubrir las necesidades y, por consiguiente, cualquier suma que recibieran de su hija, correspondía una mera colaboración de una buena hija respecto de sus padres. Que en caso de que los demandantes tengan derecho a la pensión, solicita que se declaren probadas las excepciones de prescripción y compensación. Que la demanda solo fue radicada hasta el 03 de diciembre de 2019, por lo que claramente se encuentra prescritas todas las mesadas pensionales causadas desde el 5 de agosto de 2009 hasta el 03 de diciembre de 2016. Que, en el evento de existir una condena, se debe compensar del retroactivo pensional la suma pagada el 9 de septiembre de 2011, como devolución de saldos reconocida a los demandantes, correspondiente a \$49'836.584. la cual debe ser indexada desde el 9 de septiembre de 2011 y hasta la fecha de pago, para actualizar ese valor a la fecha. Por lo anterior, solicita que se confirme en su totalidad la sentencia y se absuelva a PROTECCIÓN S.A de todas las pretensiones de la demanda.

CONSIDERACIONES:

Antes de resolver los problemas jurídicos, es necesario hacer un breve recuento de las pruebas anexadas por las partes:

- Copia de la cedula de ciudadanía de los demandantes¹
- Copia de la cedula de ciudadanía de la causante.²
- Formulario de vinculación al Fondo de Pensiones Obligatorias administrado por PROTECCIÓN S.A., en donde se observa que la causante se afilió a dicho fondo, el 27 de marzo de 2000.³

¹ Folios 61 y 62.

² Folios 64.

³ Folio 65 y 144

- Registro civil de nacimiento de la causante LINA MARÍA SALDARRIAGA ARIAS, en donde se corrobora que nació el 14 de diciembre de 1975, y que sus padres son los demandantes.⁴
- Registro civil de defunción de la señora LINA MARIA SALDARRIAGA ARIAS, en el cual se certifica que la muerte ocurrió el **05 de agosto de 2009**.⁵
- Documento expedido por PROTECCIÓN S.A. en donde se les niega la pensión de sobrevivientes a los demandantes por el fallecimiento de su hija LINA MARÍA SALDARRIAGA ARIAS, argumentando que conforme al trámite administrativo, éstos no dependían económicamente de la fallecida, comprobándose que sin el aporte de la afiliada fallecida, pueden subsistir sin ser vulnerado el mínimo existencial, pues la madre se encuentra pensionada y devenga mesada y salario como auxiliar de laboratorio, y el padre trabaja como conductor.⁶
- Resolución N° 020713 de 2005, por medio de la cual, el otrora ISS hoy COLPENSIONES, le reconoció a la señora MARÍA VILMA ARIAS DE SALDARRIAGA, una pensión de vejez a partir del 1° de noviembre de 2005, en cuantía de \$581.297.⁷
- Solicitud de prestación económica por sobrevivencia, elevada por los demandantes.⁸
- Documento referente a la nómina de la señora MARÍA VILMA ARIAS, emitido por el Laboratorio Médico Las Américas S.A.⁹
- Declaraciones para acreditar derechos a pensión de sobrevivencia pensión obligatoria rendidas por JOSÉ DOMINGO SALDARRIAGA JIMÉNEZ Y MARÍA VILMA ARIAS.¹⁰

⁴ Folios 66 y 67

⁵ Folio 68

⁶ Folios 70 – 150 a 152

⁷ Folios 74 a 76

⁸ Folios 148.

⁹ Folio 154.

¹⁰ Folios 156, 158 y 160.

- Constancia del pago de la devolución de saldos realizada a la señora MARÍA VILMA ARIAS, por valor de \$49'836.584, y generada el 9 de septiembre de 2011.¹¹
- Historia laboral de la causante, en donde se acredita que cotizó 468.43 semanas.¹²
- Registro civil de defunción del demandante JOSÉ DOMINGO SALDARRIAGA JIMÉNEZ, en el que se corrobora que falleció el 25 de junio de 2021.¹³

De acuerdo a lo anterior, los **problemas jurídicos** a resolver de conformidad con el recurso interpuesto, se centrarán en establecer: *i)* si los demandantes acreditan la calidad de beneficiarios con ocasión del fallecimiento su hija LINA MARCELA SALDARRIAGA ARIAS, por depender económicamente de ésta; y de salir avante dicha pretensión, se analizará *ii)* si proceden los intereses moratorios o en subsidio la indexación.

i. Dependencia económica de los demandantes frente a la hija.

Atendiendo a lo anterior, la normatividad aplicable al caso es la consagrada en el artículo 74 de la ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la ley 797 de 2003, el cual exige que, a falta de cónyuge, compañero o compañera permanente e hijos con derecho, serán beneficiarios los padres del causante si dependían económicamente de éste; así mismo, indica el artículo 73 de la ley 100 de 1993, que remite al artículo 46 ibídem, el cual fue modificado por el artículo 12 de la ley 797 de 2003, que el afiliado fallecido debió haber cotizado 50 semanas dentro de los 3 años anteriores a la muerte.

En el caso objeto de estudio no se discute que la afiliada fallecida dejó causada la pensión por tener el número requerido de semanas, pues cuenta en los 3 años anteriores a su muerte con 154,29 semanas de cotización, lo cual se corrobora con la historia laboral aportada con la contestación de la demanda.

¹¹ Folios 162.

¹² Folios 164 a 171.

¹³ PDF03

En cuanto a la calidad de beneficiarios, si bien el parentesco se encuentra plenamente acreditado con el registro civil de nacimiento, donde se observa que los demandantes son los padres de la causante, se debe demostrar suficientemente la dependencia económica de la asegurada fallecida, que es el tema sobre el cual se circunscribe el problema jurídico y los alegatos formulados.

Partiendo de lo anterior, debe decirse que esta Sala ha entendido que *“La dependencia económica es la sujeción de una persona hacia otra, por proporcionarle esta lo necesario para sustentar su vida y llevarla de manera moderada, sencilla, decorosa, de acuerdo a su posición social”* (Sentencia del Tribunal Superior de Medellín, Sala Laboral, del 13 de marzo de 1998)

En este mismo sentido, se tiene que desde el año 2003, la Corte Suprema de Justicia hizo claridad del significado de dependencia económica, y en sentencia 19.867 del 27 de marzo de 2003 sostuvo que esta no debe de entenderse como *total y absoluta*, dándose la posibilidad de admitir que los padres dependientes económicamente de alguno de sus hijos se puedan beneficiar en forma conjunta de otros hijos o por actividades dirigidas a obtener la subsistencia, siempre que las ayudas no se conviertan en aportes autosuficientes que hagan desaparecer la dependencia.

Insistiendo frente al tema de la *dependencia económica*, resulta necesario recordar lo manifestado por la Corte Constitucional en sentencia C-111 de 2006, en la que indica que para que sea procedente el reconocimiento de la prestación reclamada, frente a la dependencia económica debe suponerse *“... un criterio de necesidad, esto es, de sometimiento o sujeción al auxilio recibido de parte del causante, de manera que el mismo se convierta en imprescindible para asegurar la subsistencia de quien, como los padres, al no poder sufragar los gastos propios de la vida pueden requerir dicha ayuda en calidad de beneficiarios. Por ello la dependencia económica no siempre es total y absoluta... Por el contrario, la misma responde a un juicio de autosuficiencia, que, en aras de proteger los derechos fundamentales a la vida, al mínimo vital y a la dignidad humana, admite varios matices, dependiendo de la situación personal en que se encuentre cada beneficiario.”*

A efectos de determinar en cada caso particular, si una persona es o no dependiente, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha establecido un

conjunto de reglas a partir de la valoración del denominado “*mínimo vital cualitativo*” o lo que es lo mismo, del conjunto de condiciones materiales necesarias para asegurar la congrua subsistencia de cada persona en particular. Entre estos criterios se pueden señalar, entre muchos otros que *“Para tener independencia económica los recursos deben ser suficientes para acceder a los medios materiales que garanticen la subsistencia y la vida digna, el salario mínimo no es determinante de la independencia económica, la independencia económica no se configura por el simple hecho de que el beneficiario esté percibiendo una asignación mensual o un ingreso adicional, es necesario percibir ingresos permanentes y suficientes”*.

Igualmente es importante traer a colación el pronunciamiento que frente a la dependencia económica de los padres frente a los hijos hizo la Corte Suprema de Justicia, en sentencia con radicado 46555 del 22 de mayo de 2013, en la que indicó:

“... tratándose de la pensión de sobrevivientes, la dependencia económica de los padres no tiene que ser total, pues así ellos se provean de algún sustento, que no los convierta en autosuficientes, tienen derecho a la garantía pensional cuando fallece el hijo que les brindaba un verdadero apoyo económico, por quedar en imposibilidad de procurarse una vida digna.”

Concordado lo anterior, es claro que la dependencia que debe acreditarse, no tiene que ser total y absoluta, es decir, es posible que la persona que reclama pueda percibir rentas o ingresos adicionales, y ser beneficiaria, siempre y cuando estos no alcancen a cubrir los costos de su propia vida (CSJ 31.346 de 2008, SL 400 y SL 816 de 2013, SL 2800, SL 3630, SL 6690 y SL 14923 de 2014, SL 6390 de 2016, SL 4217 de 2018, SL 4185 de 2020).

Asimismo, ha indicado la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia SL 2698 de 2019 que, para declarar la existencia de la dependencia económica, además de otras condiciones, es necesario demostrar que el aporte proveniente del causante hubiera sido significativo y proporcionalmente representativo en relación con los otros ingresos percibidos por quien reclama, en la anterior providencia se reiteró al respecto sobre el mismo concepto lo ya indicado en las sentencias CSJ SL 14923 de 2014, reiterada en SL 15116 de 2014 y SL 14539 de 2016:

“Por otra parte, es importante recordar que la dependencia económica de los padres se debe definir y establecer en cada caso particular y concreto para el momento del deceso del afiliado, tema que es bien definido por la Corte Constitucional en la sentencia C-111 de 2006, bajo el concepto del mínimo vital cualitativo, según el cual deben ser evaluadas las condiciones materiales necesarias para asegurar la congrua subsistencia de cada persona en particular, por lo que para hablar de independencia económica se debe contar con los recursos suficientes para acceder a los medios materiales que garanticen la subsistencia y la vida digna.”

Asimismo, cuando los padres pretendan el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes por la muerte de un hijo, frente a la demostración de la dependencia económica del causante al momento del fallecimiento, la Corte Suprema de Justicia ha definido unos criterios en la sentencia SL-5605-2019, que pasan a señalarse:

“La dependencia deber ser:

Cierta y no presunta:

«Se tiene que demostrar efectivamente el suministro de recursos de la persona fallecida hacia el presunto beneficiario, y no se puede construir o desvirtuar a partir de suposiciones o imperativos legales abstractos como el de la obligación de socorro de los hijos hacia los padres».

Regular y periódica

De manera que no pueden validarse dentro del concepto de dependencia los simples regalos, atenciones, o cualquier otro tipo de auxilio eventual del fallecido hacía el presunto beneficiario;

Significativas, respecto al total de ingresos de beneficiarios

“se constituyan en un verdadero soporte o sustento económico de éste; por lo que, tales asignaciones deben ser proporcionalmente representativas, en función de otros ingresos que pueda percibir el sobreviviente, de tal manera que si, por ejemplo, recibe rentas muy superiores al aporte del causante, no es dable hablar de dependencia”.

En igual sentido, en sentencia SL2180-2021, en la que hizo alusión a la SL5605-2019, ilustró lo concerniente a la dependencia económica, así:

“De otra parte esta Sala, en nutrida jurisprudencia, ha precisado que la dependencia económica que es exigida a los padres o a los hijos dependientes para acreditar la condición de beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, no implica que los mismos se encuentren en estado de mendicidad, con lo cual pueden contar con recursos propios u otras fuentes de recursos, no obstante los mismos no les permiten una autosuficiencia (sentencias CSJ SL9640 – 2014, CSJ SL9640 – 2014, SL8928 – 2014, CSJ

SL30790-2007, CSJ SL22132-2004, CSJ SL24141-2005, CSJ SL26406-2006, CSJ SL30348-2007, y CSJ SL31205-2007).

Con ello se entiende que la dependencia económica de los padres o de los hijos respecto de aquéllos, que aspiran al reconocimiento como beneficiarios, no tiene que predicarse total y absoluta respecto del pensionado fallecido; no obstante no se puede entender que esto habilitó que cualquier ayuda por parte del progenitor o del descendiente se convierte en dependencia económica SL 14539-2016, SL 4103-2016 y SL 16184 - 2015 y con ello deben aplicarse criterios que permiten distinguir entre la simple ayuda o colaboración propia de la solidaridad familiar, de la dependencia real dirigida a que los ingresos que el hijo procuraba a sus progenitores o de éstos eran de tal entidad que sin ellos tendrían un cambio sustancial de las condiciones de su subsistencia"

Descendiendo al **caso de autos**, y analizada la prueba documental en conjunto con las declaraciones recibidas por los testigos, esta Sala extrajo lo siguiente:

Lo primero que debe indicarse en lo referente al interrogatorio de parte realizado tan solo a la señora MARÍA VILMA ARIAS, toda vez que el señor JOSÉ DOMINGO SALDARRIAGA JIMÉNEZ, padre de la causante falleció el 25 de junio de 2021; es que existe un principio universal, el cual señala que la prueba no puede ser creada por quien la invoca, lo que quiere decir que los demandantes no pueden crear su propia prueba para luego valerse, sacar provecho o beneficio de la misma, pues es indiscutible no solo la presunción sino la convicción de la existencia de situaciones que afectan su credibilidad e imparcialidad.

Ahora, en el interrogatorio de parte la demandante indicó que, en el año 2005, se le reconoció la pensión de vejez, sin tener el valor exacto de su mesada. Manifestó que, para la fecha del fallecimiento de su hija, se encontraba laborando para el LABORATORIO MÉDICO DE LAS AMÉRICAS, pero que no recuerda el salario percibido, y afirma que posteriormente le dieron medio tiempo. Indica que con lo devengado pagaba los gastos del hogar, la pensión de su hijo JAVIER quien estaba enfermo, compraba medicinas y paga todas las deudas, sin recordar cuales eran, pero resalta que no pagaba arriendo, debido a que vivían en la casa de la hija. Expresó que la causante le entregaba entre 350 mil pesos o 400 mil, la cual destinaba para ajustar los gastos del hogar y para la medicina de JAVIER, ya que era muy cara. Afirmó que desconoce cuales eran los gastos que tenía su hija en Bogotá, pero que ella vivía con una sobrina a la cual le estaba dando estudio. Y que el señor JOSÉ

DOMINGO SALDARRIAGA, trabaja 1 o 2 veces a la semana y antes era ella la que le tenía que ayudar.

Para corroborar la información brindada por la demandante, se recibió la declaración de la señora MARIA FÁTIMA JARAMILLO, quién es la hermana de la demandante, la cual manifestó su sobrina quien aportaba mensualmente entre \$350.000 a \$400.000 al hogar, y algunas veces le daba otro poquito, constándole lo manifestado, toda vez que en ocasiones ella iba con la hermana y reclamaban la plata, y además hablaba mucho con la sobrina. Expresó que vivían en la casa de la causante, la cual se encontraban pagando entre su sobrina y su hermana. Expuso que su cuñado, es decir, el demandante, dependía de la señora MARÍA VILMA ARIAS y la causante, ya que él trabajaba manejando taxi y era muy poco el dinero que se hacía. Afirmó que cuando falleció su sobrina, la demandante se encontraba trabajando en la Clínica Las Américas y que también era pensionada. Indicó que es cierto que MARIA VILMA ARIAS comenzó a adquirir muchas deudas, de las cuales no ha podido salir, y que, sumado a ello, su sobrina dejó deudas que le tocó saldar a la demandante, razón por la cual, desde que falleció la causante la situación fue muy difícil, pero que desconoce a cuanto ascendían los gastos del hogar.

Por otro lado, la testigo NATALIA EUGENIA DIAZ, quien es amiga de la demandante hace 30 años, y que trabajaron juntas en el LABORATORIO MÉDICO DE LAS AMÉRICAS, señaló que ella sabe que la hija fallecida les ayudaba mucho, sin saber la cantidad, pero afirma que era una ayuda muy esencial. Manifestó que la causante se había ido para Bogotá y que se llevó a vivir con ella una sobrina. Expresó que la casa donde vivían era de la hija fallecida, por lo que cree que no pagaban arriendo. Expuso que no sabe cómo la hija les enviaba el dinero, pero que cuando iba a visitarlos se daba cuenta que la causante les mandaba, pues era la misma demandante quien le decía que le mando para una esto y aquello, y que hasta en ocasiones la acompañaba a mericar. Indica que no sabe quién daba el mayor aporte para el hogar. Manifiesta que no sabe cuánto aportaba el demandante al hogar, pues lo único que conoce es que algunas veces trabajaba en un carro por días pero que no sabe si es de un familiar o liquidaba a un tercero y cree que no ganaba más del mínimo. Y que se imagina que, con la ayuda de la hija fallecida, se ayudaban con los gastos del hogar.

Ahora bien, después de analizada la prueba testimonial y documental en su conjunto, no hay duda alguna que la afiliada fallecida aportaba para el hogar, no obstante, los testigos por un lado desconocen y no acreditan con certeza a cuanto ascendía el valor de dichas ayudas; de igual forma, desconocen cuál era la destinación y la distribución de los mismos, y si bien indican que la casa en que vivían era de propiedad de la causante, existen desconciertos respecto al pago de la misma, pues la testigo MARÍA FÁTIMA JARAMILLO, quien es hermana de la demandante, expresó que la casa la pagaban entre las dos, es decir, la demandante y la afiliada fallecida.

En lo que respecta concretamente a la ayuda en dinero entregada por la causante, existen contradicciones en este aspecto, ya que la misma demandante en su interrogatorio manifestó diferentes valores, expresando en primera oportunidad que la hija le entregaba entre \$150.000 a \$400.000, y posteriormente indicó que el aporte oscilaba entre \$350.000 a \$400.000, encontrándose incoherencia en lo declarado; sumado a ello, en la declaración que realizó PROTECCIÓN S.A., la demandante dejó constancia que el valor que aportaba la causante era de \$800.000, justificando en su declaración que, dicho valor era debido a que la hija también les otorgaba la vivienda y no tenían que pagar arriendo.

Es importante advertir que si bien la demandante y las testigos, indican que la señora MARÍA VILMA ARIAS, tiene muchas deudas y que no ha podido saldarlas, e incluso una testigo manifestó que la afiliada fallecida también dejó deudas, para esta Sala no existen cifras determinadas ni mucho menos quedaron probadas dentro del proceso, para poder establecer que la situación de vida de los demandantes cambió a raíz de los problemas económicos dejados por su hija, y no sobra señalar que las deudas personales adquiridas por los demandantes para su propio beneficio no acreditan una dependencia.

En cuanto a las pruebas documentales, se aportó el certificado laboral y la resolución del reconocimiento de la pensión de vejez de la demandante, valores que sumaban aproximadamente \$1'750.000, lo que permite deducir que la demandante era autosuficiente, y podía garantizar su mínimo vital, ya que tenían ingresos suficientes y superiores para su propio sustento económico.

Asimismo, causa extrañeza para la Sala, que la testigo MARÍA FÁTIMA JARAMILLO, como hermana de la demandante y aparentemente muy cercana a su sobrina fallecida, que afirmara en su declaración que la ayuda de la causante para el hogar era de vital importancia, sin embargo, no tiene claro los montos ni los gastos que tenía su hermana, ni mucho menos cuales eran los valores de su pensión o su salario, además, indicó que la demandante era quien asumía todos los gastos del hogar y que era la cabeza del núcleo familiar, lo cual contraría con el desconocimiento de los gastos del hogar, pues solo indica que en ocasiones acompañaba a la demandante a reclamar el dinero, lo que por sí solo no da certeza para establecer una dependencia de los padres frente a la causante.

En cuanto a la declarante NATALIA EUGENIA DIAZ, esta debe catalogarse como una testigo de oídas, toda vez que a las preguntas realizadas contestó saberlo debido a que la demandante se lo contaba, y a pesar de que presuntamente tienen buena comunicación con la familia, no le consta directamente esa contribución que le brindaba la causante.

Así púes, con el análisis de la prueba, se pudo evidenciar que la ayuda económica otorgada por la hija fallecida no era relevante como lo quiere hacer ver la demandante, sino por el contrario era una ayuda que refleja un acto de solidaridad y de buena hija, pues esta no era esencial e importante para la subsistencia del núcleo familiar, como tampoco se puede concluir que sea relevante, significativa y necesaria para la calidad de vida de los demandantes, puesto que, no se demostró efectivamente que la ayuda fuera cierta, significativa y periódica.

En lo que tiene que ver con el señor JOSÉ DOMINGO SALDARRIAGA, conforme a lo indicado en el interrogatorio de parte por la señora MARÍA VILMA ARIAS sobre la situación particular de su esposo, es claro que la subordinación económica estaba a cargo de la demandante y no de la hija fallecida, pues si bien este no tenía una capacidad económica próspera, la actora expresó que con los ingresos que él percibía solventaba sus gastos básicos y que en lo demás ella le colaboraba, tanto es así que era beneficiario en salud de la demandante y era ésta quien le pagaba las cotizaciones a pensión, llegando a recibir la misma para el año 2015, como lo indica la actora.

Con todo lo anterior, se puede concluir por parte de esta Sala, al igual que lo señaló el juez, que no existía una dependencia económica de los padres frente a su hija, ya que es claro que lo que brindaba la afiliada antes de su muerte era una contribución para el hogar, pero sin constituir un verdadero soporte o sustento económico necesario para hablar de dependencia de alguno de sus padres, lo cual contrario a un soporte económico fundamental, debe ser visto más como un auxilio que realizaba todo buen hijo de familia.

Aunado a lo anterior, no quedó probado, que la destinación de la ayuda económica de la afiliada, fuera para sostener los gastos de los demandantes, pues se repite, no se acreditaron sumas medianamente exactas como lo señaló la demandante en su interrogatorio, dejando claro para la Sala, que la situación de vida de los accionantes no se vio afectada después del fallecimiento de su hija.

Pues bien, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, la libre formación del convencimiento y la valoración probatoria de que trata el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el juez tiene la facultad de libre apreciación y ponderación probatoria y con base en ello, inclinarse por los medios demostrativos que le brinden convicción. Así pues, en el presente caso, el juez como director del proceso puede apreciar y valorar con un criterio de conciencia cualquier prueba decretada dentro del proceso, como ya se dijo, según las reglas de la sana crítica.

Por todo lo anterior, debe decirse que no se logró probar la dependencia económicamente, por lo que los demandantes no son beneficiarios para que les sea otorgada la pensión de sobrevivientes con ocasión de la muerte de su hija, tal y como lo indicó el juez, debiéndose **CONFIRMAR** la sentencia de primera instancia íntegramente.

Con los argumentos anteriores y atendiendo al principio de consonancia de que trata el artículo 66A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, modificado por el artículo 35 de la Ley 712 de 2001, esta Sala hizo un pronunciamiento implícito de las alegaciones presentadas.

Las costas procesales de la primera instancia como lo dijo el juez. Las de la segunda instancia son a cargo de la parte demandante por no salir adelante el

recurso de apelación. Las agencias en derecho de la segunda instancia se tasan en la suma de \$200.000.

Por lo expuesto, el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley

RESUELVE:

PRIMERO: Se **CONFIRMA** la sentencia de primera instancia revisada por vía de apelación, de fecha y procedencia conocidas.

SEGUNDO: Las costas procesales y agencias en derecho como se dejó dicho en la parte motiva de esta sentencia.

Se notifica lo resuelto por **EDICTO**. De no ser susceptible del recurso extraordinario de casación se ordena devolver el expediente al juzgado de origen.

Los Magistrados,



GUILLERMO CARDONA MARTÍNEZ



CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA



HUGO ALEXÁNDER BEDOYA DÍAZ



SECRETARÍA SALA LABORAL

EDICTO VIRTUAL

La secretaría de la Sala laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín notifica a las partes la sentencia que a continuación se relaciona:

PROCESO	Ordinario
DEMANDANTES	José Domingo Saldarriaga Jiménez y María Vilma Arias de Saldarriaga
DEMANDADO	Protección S.A.
RADICADO	05-001-31-05-004-2019-00742
DECISIÓN	Confirma sentencia
MAGISTRADO PONENTE	Guillermo Cardona Martínez

El presente edicto se fija en la página web institucional de la Rama Judicial <https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/148> por el término de un (01) día hábil. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

CONSTANCIA DE FIJACIÓN
Fijado el 16 de marzo de 2023 a las
8:00am

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN
Se desfija el 16 de marzo de 2023 a la
5:00 pm


RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
SECRETARIO